

LA PEOR EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS



A NOVIEMBRE la ejecución de la inversión pública llegó solo a 52% convirtiéndose en el peor record de ejecución de la última década.

Ministerios con mayor Inversión en Ley de Presupuestos 2022 (Ley Aprobada + FET)⁽¹⁾, a noviembre de 2022
(millones de pesos, % de avance de ejecución y % de variación real)

Ministerios	Ley de Presupuestos 2022	Ejecución a noviembre 2022	% Avance a noviembre		Variación real anual ⁽²⁾	Diferencia 2022-2021
			2022	2021		
Total	5.228.676	2.730.757	52,2%	60,0%	-26,9%	-1.004.065
Obras Públicas	3.196.466	1.950.160	61,0%	67,8%	-6,6%	-137.814
Vivienda	606.405	305.520	50,4%	61,0%	-25,9%	-106.672
Salud	725.026	252.504	34,8%	48,8%	-34,6%	-133.559
Educación	142.153	38.498	27,1%	33,0%	-16,4%	-7.552
Interior	189.191	31.200	16,5%	52,2%	-95,0%	-592.735

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2022, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución acumulada en 2022. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 89,3% del Gasto de Capital aprobado.

(2) Variación del monto ejecutado acumulado a noviembre con respecto al mismo periodo del año anterior, medido en moneda 2022.

Vivienda, Salud y Educación presentan bajas ejecuciones a noviembre. Según reporte de DIPRES "los resultados de Obras Públicas, se ocasionan por un menor avance de proyectos en vialidad, concesiones y otras líneas de inversión sectorial;

en Salud y en Vivienda y Urbanismo, ocurren por el deterioro en las condiciones de oferta, escasez y mayores precios en el mercado de insumos; por último, en Educación se explican, principalmente, por retrasos en la ejecución de proyectos de construcción y conservación de jardines infantiles”.

Los nuevos Gobiernos regionales presentan en conjunto una baja ejecución a noviembre de 59,9%.

Regiones	Presupuesto 2021				Presupuesto 2022			
	Ley de Presupuestos Inicial	Ley Vigente a noviembre (a) (c)	Ejecutado a noviembre (b) (c)	% de Ejecución 2021	Ley de Presupuestos Inicial	Ley Vigente a noviembre (a) (c)	Ejecutado a noviembre (b) (c)	% de Ejecución 2022
Arica y Parinacota	35.489.986	42.214.990	33.977.574	80,5	40.120.294	49.229.768	23.848.745	48,4
Tarapacá	46.187.257	48.949.193	24.600.246	50,3	50.717.550	49.653.253	23.426.180	47,2
Antofagasta	82.071.797	83.802.520	51.410.352	61,3	88.071.960	83.149.152	38.632.965	46,5
Atacama	67.862.971	66.688.113	47.650.043	71,5	74.195.415	78.660.353	38.048.404	48,4
Coquimbo	67.213.231	72.134.781	48.615.175	67,4	74.388.499	68.819.282	32.056.967	46,6
Valparaíso	79.865.023	81.354.555	51.251.322	63,0	86.271.974	80.444.074	49.715.730	61,8
Metropolitana	127.190.168	128.271.135	118.104.075	92,1	140.661.790	139.401.521	102.592.537	73,6
O'Higgins	70.786.368	72.476.603	46.011.824	63,5	75.141.420	78.046.109	38.254.276	49,0
Maule	82.795.460	83.754.757	56.178.908	67,1	91.698.939	78.305.036	48.331.238	61,7
Ñuble	51.921.406	51.752.542	25.250.429	48,8	57.789.890	51.509.438	32.759.213	63,6
Biobío	84.404.112	91.971.592	50.940.112	55,4	93.357.162	118.602.400	76.985.259	64,9
La Araucanía	130.991.164	133.701.752	87.175.425	65,2	144.265.918	144.483.738	95.638.331	66,2
Los Ríos	51.484.010	54.079.174	39.674.398	73,4	56.540.385	51.057.793	34.299.701	67,2
Los Lagos	80.902.748	96.692.089	71.946.258	74,4	90.172.889	95.628.515	55.589.773	58,1
Aysén	58.142.285	64.002.226	39.874.095	62,3	64.463.439	70.059.513	38.099.540	54,4
Magallanes (d)	54.918.579	76.983.184	56.661.371	73,6	61.092.962	71.803.395	55.091.358	76,7
TOTAL	1.172.226.565	1.248.829.206	849.321.607	68,0	1.288.950.486	1.308.853.340	783.370.217	59,9

(a) Presupuesto 2022 aprobado en Ley de Presupuestos (inicial y vigente a noviembre de 2022).
(b) Presupuesto ejecutado; información del SIAP. No considera ejecución fondos FET.
(c) Los montos "Ley Vigente" y Ejecutado" no consideran Préstamos, Servicio de la Deuda ni Saldo Final de Caja.
(d) Las cifras de la región Magallanes no incluyen Fondema.

Aquí solo Región Metropolitana y Magallanes tienen ejecuciones superiores a 73%, el resto presenta bajas ejecuciones destacando Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y O'Higgins que presentan a noviembre ejecuciones inferiores a 50%.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA?

SENADO CONVOCA A SESIÓN ESPECIAL

La Sala del Senado convocó a una sesión especial para el próximo jueves 5 de enero con la finalidad de tratar "la grave situación que, actualmente, enfrentan múltiples obras públicas en todo el país debido a la quiebra de diversas empresas constructoras, especialmente debido al alza que progresivamente registran los materiales de construcción, lo que ha significado la paralización y abandono de las mismas, con el consiguiente impacto en las comunidades".

Además hoy se conoció el reporte de DIPRES sobre la ejecución presupuestaria y se conoció la baja ejecución de la inversión pública de los Ministerios Inversores como MOP, Vivienda, Salud entre otros que solo alcanza al 52,2% al mes de noviembre y en el caso de los nuevos Gobiernos Regionales a noviembre la ejecución solo llega al 59,9% como promedio, pero hay gobiernos regionales como Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y O'higgins que la ejecución a noviembre no llega ni al 50%.

O sea la información presupuestaria revela una mala ejecución y por otro lado, las empresa proveedoras del mundo de la construcción alegan que los Ministerios Inversores no resuelven los problemas generados por los mayores costos de la construcción y alegan un notorio retraso en cumplir con los estados de pagos -con organismos públicos que se demoran más de 2 meses en pagar las facturas por las obras ya ejecutadas-.

En los casos en que se han acordado con MOP u otro ministerio mandante un reajuste de los costos de la obra en este último trimestre -clave para darle continuidad a la obra-, el MOP señala que esas facturas con los reajustes solo los podrá empezar a pagar "desde marzo", lo cual genera inquietud en las empresas que terminan recurriendo al factoring para enfrentar estos retrasos en los pagos.

Hay preocupación transversal de todos los Comités de Senadores sobre la situación de las empresas proveedoras por estos retrasos y lentitudes en los pagos, que están significando "la quiebra de diversas empresas constructoras" y ahora esa preocupación se extiende a la lenta ejecución de la inversión pública a noviembre.

% de ejecución de inversión pública a noviembre

MOP	61%
VIVIENDA	50,4%
GOBIERNOS REGIONALES	59,9%
MINSAL	34,8%
MINEDUC	27,1%

El Senado espera tener respuestas del Ministro de Obras Públicas Juan Carlos García y del Ministro de Economía Nicolás Grau sobre la situación de la cadena de pago de las obras públicas, de como se van resolviendo los retrasos en pagar a los proveedores y la política 2023 para acelerar la ejecución.

El presupuesto para inversión pública para 2022 fue de alrededor de US\$ 7.500 millones y para 2023 crece en 5% y es un instrumento clave para una reactivación económica y/o suavizar la desaceleración del 2023 ya que significa mayor actividad y nuevos empleos.

En el mundo de las empresas proveedoras es clave acelerar la cadena de pagos, porque estos retrasos del MOP y/o GORES solo termina favoreciendo a las empresas de factoring y generando una incertidumbre sobre la capacidad de pago de los servicios públicos que resulta una mala señal para el 2023 en que se requiere un rol anti cíclico de la inversión pública.

URGENCIA NACIONAL PARA 2023: UNA POLÍTICA PARA AUMENTAR PRODUCCIÓN DE LITIO

La prensa económica sorprendió a muchos/as informando que las exportaciones del 2022 había crecido 3%, gracias a un incremento de la producción del Litio.

Hace ya algunos años sabemos que se viene un gran futuro para los productores y exportadores de Cobre y Litio producto de que son minerales altamente usados en la electromovilidad y ya tienen una alta demanda en varios países, lo que ha hecho subir los precios de esos minerales.

En el caso del Litio la tonelada subió de US\$ 5.000 de hace algunos años a US\$ 80.000 en la actualidad y el Fisco de Chile ha tenido ingresos extraordinarios en los últimos años por el royalty al Litio que deben pagar por concesión de CORFO en Salar de Atacama.

Este royalty al litio se instaló en la administración Bachelet con las modificaciones contractuales de CORFO entre 2016 y 2018 con los operadores privados SQM y Albemarle como primera expresión de la política nacional del Litio.

Lamentablemente nada más ha ocurrido en esta materia. No hay mayor producción -solo producen SQM y Albemarle en la concesión de CORFO-, no hay nuevos salares para la producción del Litio; no hay nuevas alianzas entre sector público y privado.

Al contrario la opinión pública ve con preocupación que en Salar de Maricunga, CODELCO tiene un CEOL para desarrollar litio, pero está buscando ampliarlo y dejar sin espacio de desarrollo a proyectos privados maduros que ya tienen RCA, acuerdo con las comunidades Collas y además, que se han asociado con inversionistas australianos como Lithium Power.

O sea, CODELCO no desarrolla producción de Litio en Maricunga y además, se embarca en batallas judiciales -que ha ido perdiendo- con actores privados como

el grupo Errázuriz y otros, tratando de aprovecharse de su posición de actor estatal para ampliar su CEOL que terminaría borrando el protagonismo privado.

El desarrollo futuro del Litio requiere alianzas públicos/privados, requiere que empresas públicas que pueden desarrollar el Litio como ENAMI y CODELCO generen relaciones de cooperación con inversionistas privados en los distintos salares, con una política de cooperación y no de confrontación como lo ha hecho Codelco en el Salar de Maricunga.

Se requiere ampliar la producción de Litio, desarrollarlo en nuevos Salares -como Maricunga-, hay que definir una política de revisión de contratos en Salar de Atacama, en especial para la concesión de SQM que vence en el 2030; pero si queremos un nuevo motor de desarrollo ese es ampliar la producción de litio más valor agregado.

Este 2022 sin política nacional del Litio, este mineral salvó las exportaciones 2022. Imaginemos un esfuerzo coordinado de sector público con actores privados para mejorar producción en Salares de Atacama y Maricunga -por nombrar 2 territorios-, en que predomina la cooperación y quedan atrás las batallas judiciales y se impulsa un trabajo coordinado para enfrentar los desafíos hídricos, para tener adecuados relacionamientos con las comunidades de pueblos originarios y respetar el medio ambiente, tendríamos una industria potente que puede respaldar la recuperación del crecimiento económico y el financiamiento de mejores políticas de equidad social.

Es ahora y no en 5 años más donde debemos empezar a impulsar el desarrollo de mayor producción del litio.

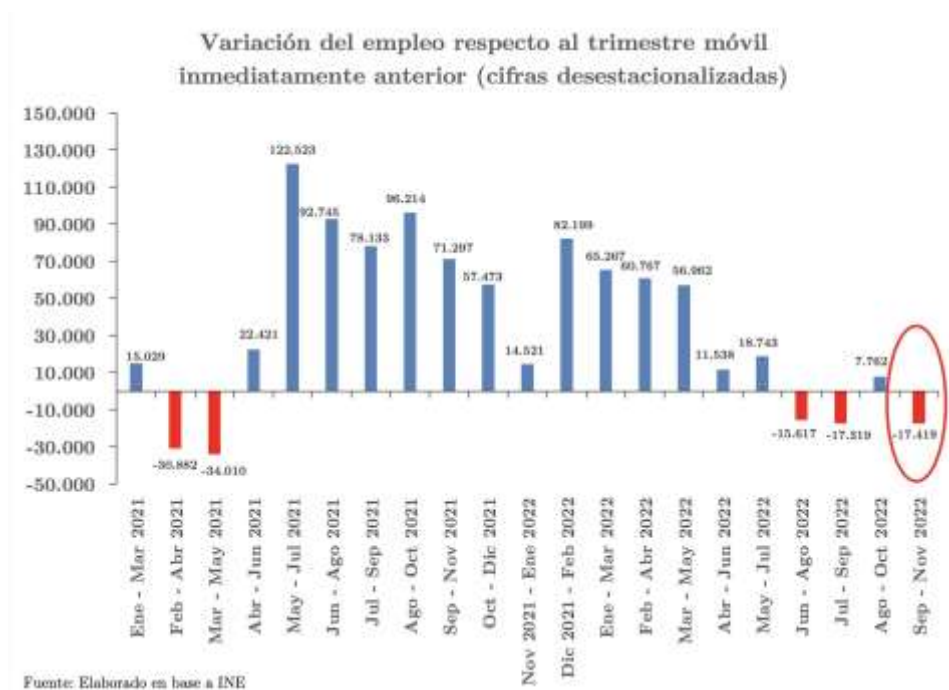
ESTANCAMIENTO EN GENERACIÓN DE EMPLEOS EN ÚLTIMO SEMESTRE

Las cifras del mercado laboral de INE muestran una situación de estancamiento, en los últimos 6 meses (entre sumas y restas) hay un estancamiento en la generación de empleos.

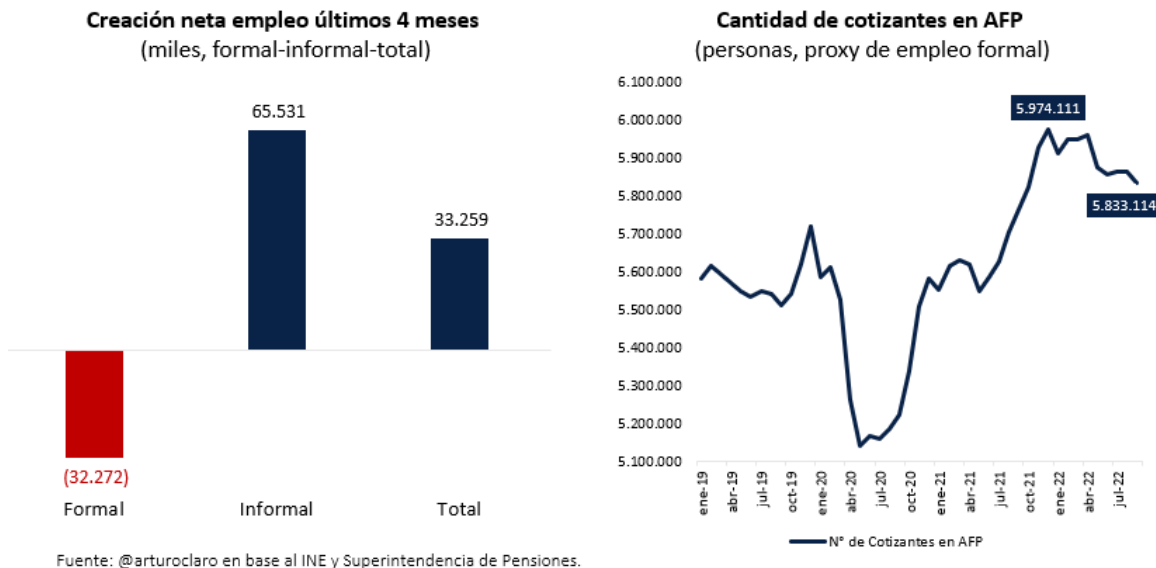
Se agotó la capacidad de recuperación de los empleos en el mes de mayo y ahí se entró a un tobogán de cifras que muestran un trimestre septiembre/noviembre 2022 de menores empleos comparados con mismo trimestre 2021.

Esto es debido a la desaceleración de la economía, caída del crecimiento que se mantendrá a lo menos en primer semestre 2023.

Los empleos que crecen son los de empleo informal.



En crisis económicas -aunque sean suaves como este 2022 en Chile- el empleo que se crea es + informal: en últimos 4 meses se han creado 65.000 empleos informales y destruido 32.000 formales.



Cifras de Superintendencia de Pensiones van en la misma dirección, ya q según último dato hay 140.000 cotizantes menos de AFP que a principio de año.

Profundización de crisis económica (crecimiento negativo de -1,5% para 2023 según BC) acelerará la informalización laboral.

En Consumo: se agotó liquidez de los retiros y tasa de política monetaria continúa muy alta.

A esto, hay que suma un mercado laboral con poco empleo y menores salarios.

Tormenta perfecta para la contracción del consumo, que será de al menos un 5,5% en 2023 y sobre todo en bienes durables, como los autos.

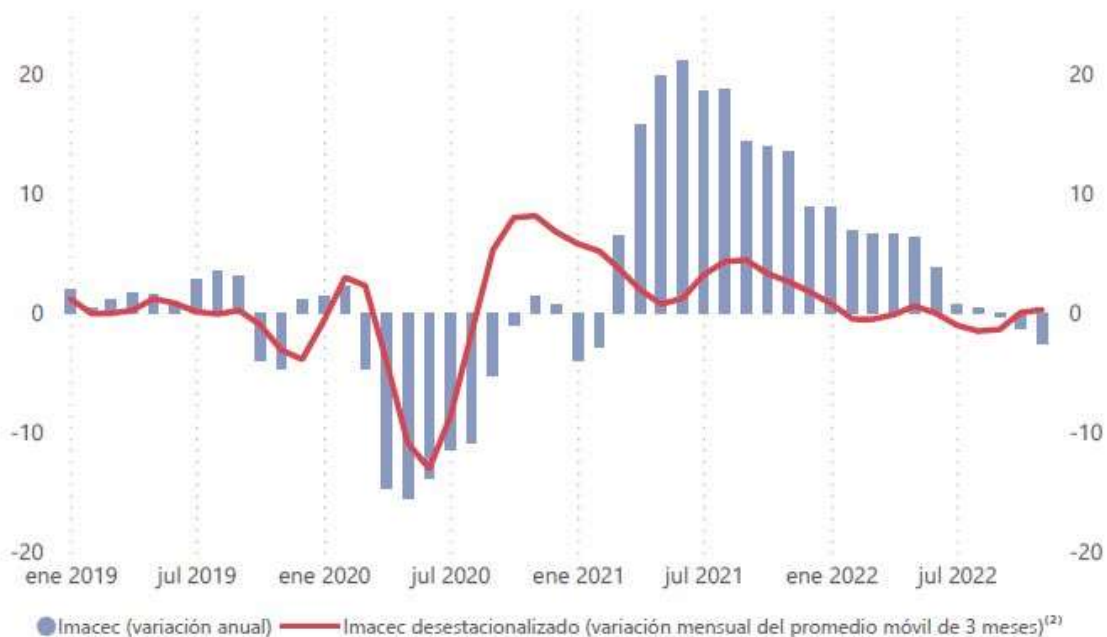
IMACEC CAE -2,5% EN NOVIEMBRE ANTICIPA UN SEMESTRE DE CIFRAS NEGATIVAS

IMACEC muestra caída de -2,5% en noviembre 2022.

Se confirma así el estado de estancamiento de la economía chilena

Imacec no minero cae -2,2% la que ya acumula 2 meses consecutivos de caída de la actividad.

Gráfico 1: IMACEC
(tasa de variación porcentual)



Esto no es sorpresa.

Las Cifras del INE de actividad industrial y comercio ya anticipaban caídas importantes de la actividad económica y además un estancamiento importante del empleo, donde se suceden destrucción de empleos y generación de empleos, pero en el neto hay estancamiento del empleo también.

Hay una caída importante del Consumo (ver caída de las ventas de supermercado que cae 17% en 12 meses)



En el escenario internacional sigue vigente las señales recesivas de la economía producto de guerra en Ucrania, posible rebrote COVID y los Bancos centrales siguen subiendo las tasas de política monetaria.

Por eso, en Chile se estima que en primer semestre 2023 se vivirá una etapa recesiva con IMACEC negativos, menos empleos, frenazo del consumo que afectará principalmente a sectores medios y vulnerables. Los temas de como recuperar el crecimiento económico para 2º semestre y las ayudas sociales a las familias vulnerables y clases medias en este ciclo recesivo debieran ser levantados en la opinión pública.

**TIPS SOBRE RENOVACIÓN DEL SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO
REMUNERADO
(BOLETÍN 15.140)**

Senadora XIMENA ORDENES NEIRA

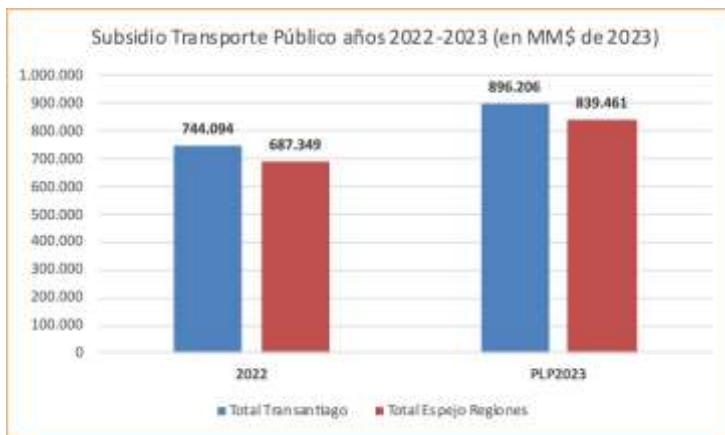
Votación en general proyecto de ley que renueva subsidio al transporte público remunerado y establece nuevo marco de financiamiento.

Este proyecto de ley es relevante para el 70% de las familias chilenas que son usuarios permanentes del transporte público y que - especialmente en regiones- requieren una señal política de que se va a iniciar en los próximos meses de modernización del transporte público regional y salir del atraso que viven hoy miles de familias usuarias del transporte público en regiones.

Chile no resiste más tener ciudadanos de primera clase que tienen transporte público con tarjeta BIP, con buses eléctricos, en que combinan Metro con transporte de superficie que reciben para este año 2023 casi \$890.000 millones para solo subsidiar el funcionamiento del Transantiago.

Mientras que las Regiones reciben un monto casi similar de \$840.000 millones que durante la última década NO hay ido a modernizar el Transporte Público regional, lo que explica los atrasos y la baja calidad del transporte público que vivimos en regiones.

Cuando uno revisa los ejercicios presupuestarios de años anteriores constata que los recursos del espejo iban más a obras regionales de desarrollo que al transporte público regionales.



Estos fondos del Espejo para regiones del transantiago lamentablemente NO se han destinado al transporte público y se han dedicado a financiar “obras de desarrollo regional” que podría haber financiado el FNDR.

Esta es la principal anomalía que requiere enmendarse en el nuevo marco legal que regulará el Subsidio al Transporte Público.

Algunos postulamos que debiera destinarse casi la totalidad del subsidio al transporte público en regiones y no nos gusta lo aprobado en la Cámara de Diputados que solo establece un piso del 20% para el transporte público regional. Está fórmula nos parece insuficiente y aquí en esta Comisión del Transporte del Senado somos partidarios de que esta herramienta del Subsidio Nacional del Transporte Público en regiones a partir del nuevo marco legal se destine casi en su totalidad a modernizar y mejorar la calidad del transporte público en regiones.

El Transporte Público es una herramienta básica de equidad social y además, ayuda a la calidad de vida de las ciudades si es que se acelera su transición energética a la electromovilidad.

Por tanto, no puede renovarse su subsidio por 2 años como proponía este Proyecto del Ejecutivo, ni tampoco puede ser un subsidio por 10 años como propuso la ley 20.378 que estamos modificando con este proyecto de ley.

Se requiere un subsidio permanente al transporte público que esté ligado a los diversos planes de transporte que se desarrollen en las regiones y sea en esos planes donde se de un rol al Transporte Público mayor y como coexiste con el transporte público menor, como se implementa en regiones australes donde deben integrarse distintas modalidades de conectividad en función de lo que definan los planes regionales de transporte, como se integran las modalidades de transporte rural y urbanas en otras regiones .

Esa capacidad institucional para elaborar Planes Regionales de Transporte debe ser parte de este proyecto en una primera etapa para que financie profesionales que elaboren esos planes de transporte regionales.

En la ley de presupuesto 2023 renovamos el subsidio para este año, pero también firmamos un Protocolo anexo donde la tramitación de este proyecto de ley fue parte sustantiva del debate presupuestario.

Ahí concordamos avanzar este 2023 tanto por la vía reforma legal como administrativa en dar señales de que al Senado y al Ejecutivo le importa avanzar ahora -y no en 2025- con modernizar el transporte público regional.

Esas señales de que importa esa modernización debemos darla permanentemente y como Comisión queremos reiterarlo porque estamos convencidas de la relevancia de que mejorar el transporte público mejora la calidad de vida de las familias chilenas.

Sobre la estrategia legislativa -en la discusión presupuestaria concordamos con DIPRES y SEGPRES -de que un proyecto de ley que renueve de modo permanente el Subsidio al Transporte Público y modifique sustantivamente la ley 20.378 con señales pro uso en transporte público estaría ingresado vía Senado a fines de enero o principios de marzo y también avanzaríamos en proyecto de ley corto sobre condiciones laborales para choferes del transporte público y sobre regulaciones al transporte público menor.

Es importante legislar sobre este subsidio al transporte público tanto para la RM como para Regiones y por eso votamos en general a favor la idea de legislar para que empecemos a mostrar que es clave para mejorar la vida de las personas.

Apruebo la idea de legislar

INFORME PARA SESIÓN ESPECIAL SOBRE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y QUIEBRE DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

El informe del 30 de diciembre de DIPRES señala que la ejecución a noviembre de la inversión pública de sólo 52,2% es la peor de la década.



Vivienda, Salud y Educación presentan bajas ejecuciones a noviembre. Según reporte de DIPRES “los resultados de Obras Públicas, se ocasionan por un menor avance de proyectos en vialidad, concesiones y otras líneas de inversión sectorial; en Salud y en Vivienda y Urbanismo, ocurren por el deterioro en las condiciones de oferta, escasez y mayores precios en el mercado de insumos; por último, en Educación se explican, principalmente, por retrasos en la ejecución de proyectos de construcción y conservación de jardines infantiles”.

Ministerios con mayor Inversión en Ley de Presupuestos 2022 (Ley Aprobada + FET)⁽¹⁾, a noviembre de 2022
(millones de pesos, % de avance de ejecución y % de variación real)

Ministerios	Ley de Presupuestos 2022	Ejecución a noviembre 2022	% Avance a noviembre		Variación real anual ⁽²⁾	Diferencia 2022-2021
			2022	2021		
Total	5.228.676	2.730.757	52,2%	60,0%	-26,9%	-1.004.065
Obras Públicas	3.196.466	1.950.160	61,0%	67,8%	-6,6%	-137.814
Vivienda	606.405	305.520	50,4%	61,0%	-25,9%	-106.672
Salud	725.026	252.504	34,8%	48,8%	-34,6%	-133.559
Educación	142.153	38.498	27,1%	33,0%	-16,4%	-7.552
Interior	189.191	31.200	16,5%	52,2%	-95,0%	-592.735

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2022, se ordenan descendientemente por el porcentaje de ejecución acumulada en 2022. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 89,3% del Gasto de Capital aprobado.

(2) Variación del monto ejecutado acumulado a noviembre con respecto al mismo período del año anterior, medido en moneda 2022.

Los nuevos Gobiernos regionales presentan en conjunto una baja ejecución a noviembre de 59,9%.

Gobiernos Regionales - Programas de Inversión
Presupuesto Vigente y Ejecutado acumulado a noviembre 2021-2022
(miles de pesos de cada año y % de avance sobre Ley Vigente)

Regiones	Presupuesto 2021			% de Ejecución 2021	Presupuesto 2022			% de Ejecución 2022
	Ley de Presupuestos Inicial	Ley Vigente a noviembre (a) (c)	Ejecutado a noviembre (b) (c)		Ley de Presupuestos Inicial	Ley Vigente a noviembre (a) (c)	Ejecutado a noviembre (b) (c)	
Arica y Parinacota	35.489.986	42.214.990	33.977.574	80,5	40.120.294	49.229.768	23.848.745	48,4
Tarapacá	46.187.257	48.949.193	24.600.246	50,3	50.717.550	49.653.253	23.426.180	47,2
Antofagasta	82.071.797	83.802.520	51.410.352	61,3	88.071.960	83.149.152	38.632.965	46,5
Atacama	67.862.971	66.688.113	47.650.043	71,5	74.195.415	78.660.353	38.048.404	48,4
Coquimbo	67.213.231	72.134.781	48.615.175	67,4	74.388.499	68.819.282	32.056.967	46,6
Valparaíso	79.865.023	81.354.555	51.251.322	63,0	86.271.974	80.444.074	49.715.730	61,8
Metropolitana	127.190.168	128.271.135	118.104.075	92,1	140.661.790	139.401.521	102.592.537	73,6
O'Higgins	70.786.368	72.476.603	46.011.824	63,5	75.141.420	78.046.109	38.254.276	49,0
Maule	82.795.460	83.754.757	56.178.908	67,1	91.698.939	78.305.036	48.331.238	61,7
Ñuble	51.921.406	51.752.542	25.250.429	48,8	57.789.890	51.509.438	32.759.213	63,6
Biobío	84.404.112	91.971.592	50.940.112	55,4	93.357.162	118.602.400	76.985.259	64,9
La Araucanía	130.991.164	133.701.752	87.175.425	65,2	144.265.918	144.483.738	95.638.331	66,2
Los Ríos	51.484.010	54.079.174	39.674.398	73,4	56.540.385	51.057.793	34.299.701	67,2
Los Lagos	80.902.748	96.692.089	71.946.258	74,4	90.172.889	95.628.515	55.589.773	58,1
Aysén	58.142.285	64.002.226	39.874.095	62,3	64.463.439	70.059.513	38.099.540	54,4
Magallanes (d)	54.918.579	76.983.184	56.561.371	73,6	61.092.962	71.803.395	55.091.358	76,7
TOTAL	1.172.226.565	1.248.829.206	849.321.607	68,0	1.288.950.486	1.308.853.340	783.370.217	59,9

(a) Presupuesto 2022 aprobado en Ley de Presupuestos (inicial y vigente a noviembre de 2022).

(b) Presupuesto ejecutado; información del SIAP. No considera ejecución fondos FET.

(c) Los montos "Ley Vigente" y Ejecutado" no consideran Préstamos, Servicio de la Deuda ni Saldo Final de Caja.

(d) Las cifras de la región Magallanes no incluyen Fondema.

Aquí solo Región Metropolitana y Magallanes tienen ejecuciones superiores a 73%, el resto presenta bajas ejecuciones destacando Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y O'Higgins que presentan a noviembre ejecuciones inferiores a 50%.

LA CRISIS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.-

Los problemas que viven las empresas constructoras están vinculadas a la lentitud que ha mostrado el gobierno en actualizar los montos de los proyectos de inversión que quedaron desfasados en relación al momento en que pasó por sistema nacional de inversión -cuestión que ha ido resolviendo la DIPRES coordinadamente con el MIDESO-

y la respuesta para actualizar los costos de los proyectos que ya se habían iniciado su ejecución lo que ha significado desajustes que las empresas constructoras no pudieron sostener por las alzas de precios en sector de la construcción; pero también se ha agudizado esta crisis por la lentitud y retraso de los estados de pago de obras que ya se han realizado y que los ITOS del MOP han fiscalizado.

Es incomprensible estas demoras en los pagos de los GORES y los Ministerios inversores a las empresas constructoras, además considerando que la mayoría de esas entidades públicas tenían espacio para pagar considerando su baja ejecución.

El sector público se comprometió a pagar en 30 días y eso no está ocurriendo con muchos gobiernos regionales y ministerios inversores.

Se requiere un compromiso ministerial de que se agilizará la gestión en especial el pago a las empresas proveedoras porque está ahí el corazón de la reactivación del 2023.

UNA POLÍTICA ANTI CÍCLICA.-

La economía está en una fase recesiva que durará a lo menos este primer semestre 2023 -ya se sabe que el mes de noviembre la actividad económica cayó en -2,5%- y viviremos un período de menor consumo, de menor actividad y de menores empleos.

Acelerar la ejecución de la inversión pública tanto en los ministerios inversores como en Gobiernos regionales -tanto para adjudicar obras como para pagar oportunamente en 30 días- significan mayor actividad económica para empresas proveedoras - mayoritariamente PYMES-, más empleos, más liquidez para las regiones, por tanto, debiera ser una cuestión imperativa tanto para el gobierno como para el Parlamento lograr que la inversión pública se ejecute adecuadamente y no siga teniendo la peor ejecución de la década.

Un adecuado Plan de Reactivación requiere abordar estos 2 crisis que se vivió el 2022:

- Acelerar la ejecución de la inversión pública y no repetir para 2023 estos retrasos y lentitudes
- Mejorar la gestión de los estados de pago a las empresas proveedoras post fiscalización y recepción de la ejecución de las obras para que no terminen alimentando el negocio de los factoring.

AMATEURISMO EN SEGUNDO PISO DE LA MONEDA

La polémica de los Indultos ha venido a confirmar que la asesoría directa al Presidente de la República en el segundo piso de la Moneda es de baja calidad y como dicen muchos analistas de la plaza es “muy amateur”, de personas amigas con bajas competencias para esa tarea y presentan una exigua experiencia en manejos de Estado.

No solo se requieren Ministros y Ministras con capacidad de gestión y comunicacional, sino también se requiere un staff de asesores presidenciales con experiencia en asuntos públicos lo que claramente carece el actual equipo del 2° piso.

Ya se veía que equipo de apoyo internacional generaba más problemas que soluciones y aquí se vio que la decisión de usar la exclusiva facultad presidencial de indultar fue un tremendo error político ya que se benefició a personas con fuerte curriculum delictual que no tienen nada de luchadores sociales y el timing en que se realizó terminó abortando el Acuerdo Nacional por la Seguridad que le permitía al Gobierno mostrar un avance en un área altamente sensible donde la desconfianza ciudadana hacia su manejo del tema explica la fuerte caída de la aprobación presidencial que oscila entre el 24% de la CEP y el 27% de CADEM.

O sea la principal señal política de que se estaba tomando en serio el tema de. Seguridad, con políticas transversales fue dañado fuertemente por una decisión errada como fue indultar a delincuentes.

El error se ahondó por desafortunadas declaraciones del Presidente de la República comentando fallos judiciales, cuestión que le fue reprochado por el pleno de la Corte Suprema; acelerando renuncia de Ministra de Justicia -en medio de la 3ª votación de candidato a Fiscal Nacional- y terminó con la renuncia del Jefe de Gabinete del Presidente, que además, acumuló un inusitado poder en cuestiones que marcaron la mala gestión gubernamental como fue la visita a Temucuicui de la ex Ministra del Interior.

Parte de la confianza que tienen los gobernantes se construye también al conocer a quienes lo asesoran y en estos 10 meses se construyó la imagen de que en segundo piso hay exceso de amateurismo, asesores sin la debida calificación y muchos amigos que “jugando a gobernar” como lo anotó senador Flores.

A nivel de Ministros/as hay varios que no se conocen, que no asumen la problemática sectorial actual, que siguen con un discurso de campaña y no impulsan políticas sectoriales pertinentes a la realidad como ocurre con Educación y Economía por citar 2 casos emblemáticos. En Educación hay un Acuerdo Transversal sobre la crisis educativa post pandémica (más ausentismo, menores aprendizajes, más deserción por ej) y aún MINEDUC

no lanza un Plan para la Recuperación Educativa ni destina más recursos para implementarlo, cuando ya estamos ad portas de iniciar el año escolar 2023.

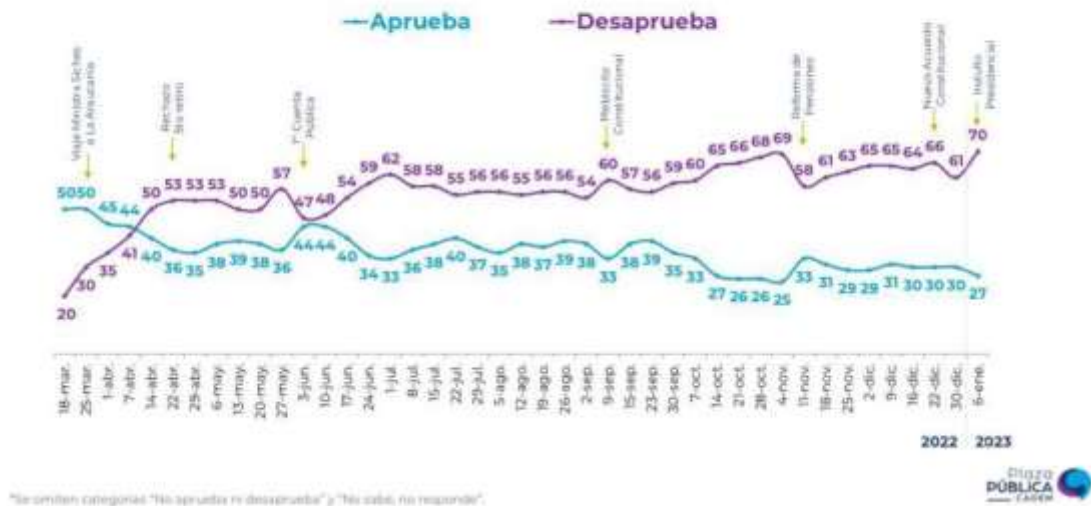
El affaire de los indultos incluso borró el anuncio del plan de ayudas sociales que incluye duplicar el bono marzo para 1,5 millones de familias vulnerables, pero que lamentablemente deja afuera a las clases medias empobrecidas que no tienen causantes de Asignación Familiar ni SUF que es la herramienta usada para distribuir las ayudas sociales. Si solo se ayuda al 20% de las familias queda abierta la presión política para exigir nuevas medidas sociales para ayudar a familias que tiene jefe de hogar con empleo informal o emprendedores sin hijos que no generan AF ni SUF.

Gobierno debiera dar certezas por ejemplo que no habrá alza de tarifas en transporte público, porque hasta la alza de \$40 sugerida por panel de expertos ha sido descartada momentáneamente -por ahora- por Ministro de Transporte y debiera además, comprometerse a que ese congelamiento tarifario se extiende a zonas reguladas y no reguladas.

Fue tan inmenso el error político de los indultos que borró toda la agenda gubernamental que incluso la desaprobación a la gestión presidencial subió a 70%. Los amateurs debieran anotar este rechazo ciudadano inédito para enmendar.

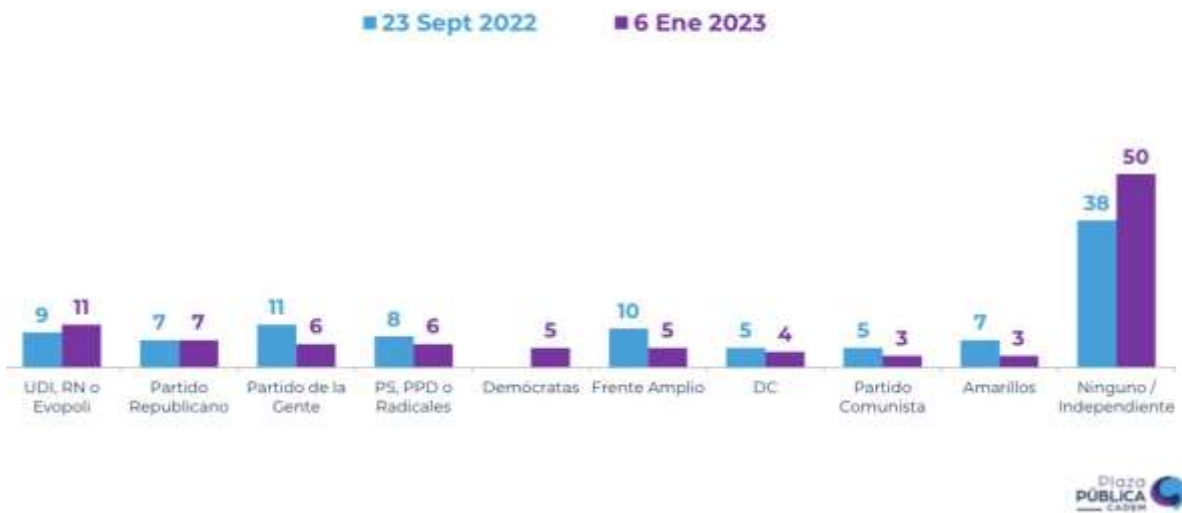
Aprobación Presidencial

Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como **Gabriel Boric** está conduciendo su gobierno? %



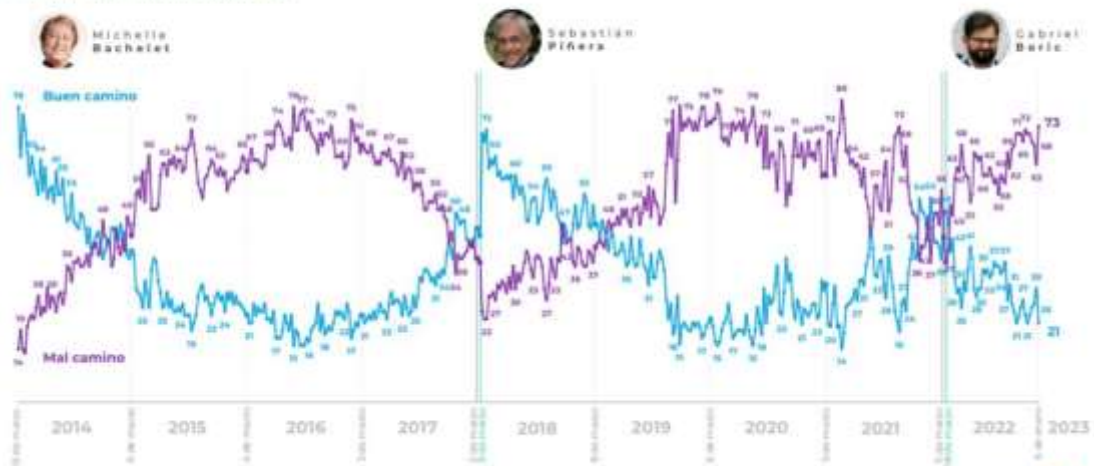
Identificación con partidos

¿Con cuál de los siguientes partidos o movimientos políticos usted se identifica o se siente más cercano? %



Evaluación del País

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? %



*La diferencia para cumplir 100% corresponde a las respuestas "No por el bueno ni por el malo" y "No sé, no responde"

MINUTA PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES CONTEMPLADOS EN LA LEY N° 20.720 Y CREA NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
(BOLETÍN N° 13.802-03)

Origen del proyecto de ley	Mensaje Presidencial
Fecha de ingreso	22 de septiembre 2020

I. Ideas centrales del Proyecto de Ley

El proyecto moderniza la legislación concursal actual, a través de una batería importante de medidas que tienen por objeto:

- Disminuir la pérdida social y económica de la sociedad a través de una reasignación eficiente de los recursos, haciéndose cargo de las empresas que dejan de ser viables;
- Agilizar y simplificar aspectos burocráticos de los procedimientos concursales actuales;
- Crear procedimientos concursales simplificados de rápida tramitación y de bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas;
- Incrementar las tasas de recuperación de créditos promoviendo las reestructuraciones de pasivos por sobre las liquidaciones de activos;
- Entregar mayor certeza jurídica sobre créditos cuya naturaleza amerita un tratamiento especial, estableciendo ciertas excepciones a la extinción automática de obligaciones por el término del procedimiento;
- Desincentivar a la utilización maliciosa de los procedimientos concursales.

II. Procedimientos contemplados en el Proyecto de Ley

Procedimiento	Objetivo	Quienes pueden acceder
Renegociación (vigente)	Procedimiento administrativo y gratuito en que la Superintendencia actúa como facilitadora de acuerdos entre la persona deudora y sus acreedores. Tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones del deudor o la ejecución de sus bienes para el pago de sus obligaciones vigentes.	Personas naturales que no califiquen como empresa deudora ¹ .
Reorganización (vigente)	Procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la empresa deudora, cuando ésta es viable.	Empresas deudoras medianas y grandes
Reorganización simplificada (nuevo)	Procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la empresa deudora.	Micro y pequeñas empresas

¹ Empresa Deudora: toda persona jurídica **de derecho privado**, con o sin fines de lucro, y toda persona natural que, dentro de los veinticuatro meses anteriores al inicio del Procedimiento Concursal correspondiente, haya sido contribuyente de primera categoría.

	<i>(Procedimiento menos costoso, simplificado y plazos más cortos)</i>	
Liquidación (vigente)	Procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.	Empresas deudoras medianas y grandes
Liquidación simplificada (nuevo)	Procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la persona y empresas con el objeto de propender al pago de sus acreedores. <i>(Procedimiento menos costoso, simplificado y plazos más cortos)</i>	Personas y micro y pequeñas empresas

III. Principales medidas del Proyecto de Ley, aprobado por la Comisión de Economía del Senado

Las medidas se traducen en modificaciones a artículos de aplicación general de la Ley, ajustes a cada uno de los procedimientos concursales existentes y la creación de dos nuevos procedimientos simplificados.

En particular, estos nuevos procedimientos simplificados – aplicables exclusivamente a personas y MIPES – se enmarcan en el trabajo que ha realizado la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (“SUPERIR”), en los últimos tres años, a nivel internacional junto con el Banco Mundial² y UNCITRAL³. Lo anterior, no solamente constituirá una ayuda para que las personas, micro y pequeñas empresas puedan volver a reinserirse en la economía, sino que además permitirá que todos los actores involucrados en estos procesos, tanto liquidadores, veedores, tribunales, martilleros, acreedores y la SUPERIR, puedan operar de manera más eficiente, evitándose el colapso del sistema.

A continuación, se expone un breve resumen de las principales medidas del proyecto:

a) Optimización del procedimiento de renegociación de la persona deudora (Capítulo V)

- Se permite el acceso a este procedimiento a personas que emiten boletas de honorarios (hasta ahora consideradas como empresas deudoras y, por tanto, imposibilitadas de acogerse a este procedimiento).
- Se incorpora la posibilidad del deudor de proponer un plan de reembolso complementario al acuerdo de ejecución, para propender a su aprobación y así evitar el inicio de un proceso de liquidación judicial.
- Se permite al deudor solicitar una modificación de su acuerdo de renegociación si, por circunstancias sobrevinientes, se ve impedido de cumplirlo en los términos pactados. La modificación se solicitará

² Grupo de fuerza de tareas del Banco Mundial (principios para un régimen de insolvencia efectivo para Pymes)

³ Grupo V de UNCITRAL (régimen simplificado para Pymes).

ante la SUPERIR sólo una vez y dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la resolución de admisibilidad en el Boletín Concursal.

- Se restringen las obligaciones que pueden someterse al procedimiento (alimentos, compensación económica, indemnizaciones, sanciones penales u administrativas).
- Se hace mención a que la extinción de obligaciones del deudor no afecta los derechos del acreedor frente a terceros garantes.
- Se difiere la dictación de la resolución de término, en el caso de haberse arribado a acuerdo de ejecución, hasta el vencimiento del plazo de realización de los bienes del deudor, creándose, además, una nueva causal de término anticipado del procedimiento para aquellos acuerdos de ejecución incumplidos.

b) Optimización del procedimiento de reorganización judicial de empresas deudoras (Capítulo III)

- Se otorga mayor protección a los trabajadores de empresas acogidas a procedimientos de reorganización, señalándose de forma expresa que mantienen la protección de sus derechos de acuerdo con las normas del Código del Trabajo.
- El veedor interventor en la etapa de cumplimiento tendrá más atribuciones que la de solo informar cualquier situación de incumplimiento a la SUPERIR y a los acreedores.
- Se permite que los acreedores voten la propuesta de acuerdo a través de una presentación ante el tribunal en que conste su voto.
- Se amplía el periodo de protección financiera concursal de 30 a 60 días, prorrogable por 120 días.
- Se incorpora la posibilidad de solicitar el cumplimiento del acuerdo respecto de acreedores que no verificaron oportunamente o que no se encontraban contenidos en el certificado de deudas del auditor externo.
- Se reducen los quórums para operaciones de financiamiento que superen el 20% del pasivo y con personas relacionadas.
- Se excluyen los créditos de las personas relacionadas para efectos de calcular los quórums.
- Se aumentan los plazos de verificación de créditos y para la declaración de bienes no esenciales, equiparándolos al plazo de acreditación de personerías (15 días).
- Se establece que dictada la resolución de liquidación por cualquier causa (y no solo por la no adopción del acuerdo), los créditos y operaciones de financiamiento otorgados durante la vigencia de la protección financiera concursal, gozarán de la preferencia del artículo 2.472 N.º 4 del Código Civil.
- Se establece, en términos formales y explícitos, que el procedimiento terminará una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la resolución judicial que tuvo por aprobada la cuenta final de gestión del veedor.

c) Nuevo proceso de reorganización simplificada para MIPES (Capítulo V)

- Se aplica a aquellas empresas clasificadas como micro o pequeñas empresas, según el artículo segundo de la Ley N° 20.416 (micro empresa aquella con ingresos anuales inferiores a 2.400 UF

anuales, y pequeñas aquellas con ingresos menores a 25.000 UF) y según el artículo 505 bis del Código del Trabajo (micro empresa aquella que tuviere contratados de 1 a 9 trabajadores, pequeña empresa aquella que tuviere contratados de 10 a 49 trabajadores).

- Se reducen costos del procedimiento de reorganización (se reemplaza informe de auditor externo por una declaración jurada y se crea nueva nómina de veedores para el procedimiento simplificado).
- El veedor colaborará en la elaboración de la propuesta de acuerdo de reorganización.
- Se eliminan las juntas de acreedores y se simplifica el sistema de votación del acuerdo.
- Protección financiera concursal de iniciativa exclusiva de las MIPES, salvo oposición de acreedores.
- En caso de rechazo del acuerdo, se faculta al deudor a presentar una nueva propuesta si cuenta con cierto quórum de apoyo (la mitad del pasivo con derecho a voto).

d) Optimización del procedimiento de liquidación de empresas deudoras (Capítulo IV)

- Se acortan plazos y disminuyen costos.
- Se excluyen ciertas obligaciones de la extinción automática (por ejemplo, alimentos).
- Se ordenan y clarifican las normas de rendición y objeción de cuenta final de administración.
- Se amplían las excepciones a la causal de liquidación forzosa cuando la empresa deudora o sus administradores no sean habidos.
- En el procedimiento de liquidación forzosa, se establece como regla general el procedimiento de sorteo del liquidador, a fin de evitar malas prácticas que han sido observadas.
- Se incorpora la declaración de mala fe del deudor por incumplimiento del deber de colaboración.
- Se incorporan nuevas causales de declaración de mala fe: (i) distracción u ocultación de bienes; (ii) sentencia firme acogiendo acción revocatoria; y (iii) deudor condenado por cualquiera de los delitos concursales. Asimismo, se incorpora el deber del liquidador de solicitar la declaración de mala fe de verificarse las causales.
- Se establece que la resolución de término no podrá dictarse hasta el resultado de la sentencia que falle el incidente de mala fe o la sentencia que se pronuncie sobre acciones revocatorias.
- Se incorpora mención expresa a que la extinción de obligaciones del deudor no afecta los derechos del acreedor frente a terceros garantes, zanjando un tema respecto del cual hoy existen diversos pronunciamientos judiciales.

e) Nuevo proceso de liquidación simplificada para MIPES y personas (Capítulo V)

- Se permite que el deudor conserve sus bienes -como depositario provisional- hasta la venta de éstos (se elimina, por regla general, trámite de incautación).
- Se permite la venta de bienes muebles a través de plataformas electrónicas.
- Se incorpora la compensación económica como excepción a la extinción de obligaciones del deudor o *discharge*.
- Por regla general, se eliminan las juntas de acreedores, salvo que 25% del pasivo decida lo contrario.
- Se reduce a 15 días el plazo de verificación ordinaria, para hacer más expedito el proceso.
- Se elimina la consignación de fondos para el inicio del procedimiento de liquidación simplificada.

- Se establece que se podrá solicitar un nuevo procedimiento concursal de liquidación siempre y cuando hayan transcurrido a lo menos cinco años contados desde la fecha de publicación de la última resolución de término.

f) Medidas de aplicación general

- Se permite que tanto las audiencias como las juntas de acreedores, puedan ser desarrolladas de manera telemática.
- Se elimina la actual incompatibilidad para figurar en las nóminas de liquidadores y de veedores.
- Se incorpora la definición de Procedimientos Concursales Especiales.
- Se incorpora a la SUPERIR como titular de la acción penal.
- Se incorpora la pena accesoria de suspensión de la profesión para el que perpetre o participe con el deudor en la comisión de alguno de los delitos concursales.
- Se incorpora a los veedores interventores como sujetos fiscalizados por la SUPERIR.

Finalmente: en la Comisión de Hacienda se eliminaron los temas penales de fondo, para ser tratados todos en conjunto en el PDL de Delitos Económicos y se aprobaron los artículos pertinentes a la Comisión de Hacienda.



Gobierno (MOP/MTT) anunció nuevo trazado del Tren Santiago/Valparaíso/ Santiago con fuerte énfasis en la conexión suburbana/rural (Batuco, Til Til, Llay Llay, La Calera, Limache) para unir estos 2 grandes polos Santiago/Valparaíso....

son proyectos que trascienden a los Gobiernos y es importante conocer la opinión de expertos

Por su parte MOP Y MTT destacaron: "¡Tenemos trazado! Cumpliendo el compromiso que el Presidente

@GabrielBoric

realizó a mediados del 2022, hoy presentamos el recorrido que tendrá el tren entre Valparaíso y Santiago, conectando ambas zonas en una hora y media".

["Avanzamos recuperando los #TrenesParaChile con el trazado de este gran proyecto que marcará el renacer de la conectividad ferroviaria de pasajeros entre Valparaíso y Santiago!

Estamos cerrando brechas con territorios que han sido históricamente postergados, como Til Til y Llay-Llay.

[Este diseño y los tiempos de viaje han generado críticas de distintos sectores que probablemente generen un debate público sobre la política de Más Trenes, el potenciamiento de trenes suburbanos q ameritarían dedicar alguna próxima sesión de la Comisión de Transporte

CRÍTICAS.-

: CRÍTICA DE ALCALDE DE VALPARAÍSO Jorge Sharp

@JorgeSharp

Faltaron 12 kilómetros. El tren anunciado por el gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso. Si no se incluye a nuestra ciudad en diseño final, estaremos frente a una nueva señal del abandono del Estado de Chile a Valparaíso.

[Leo Soto diputado PS

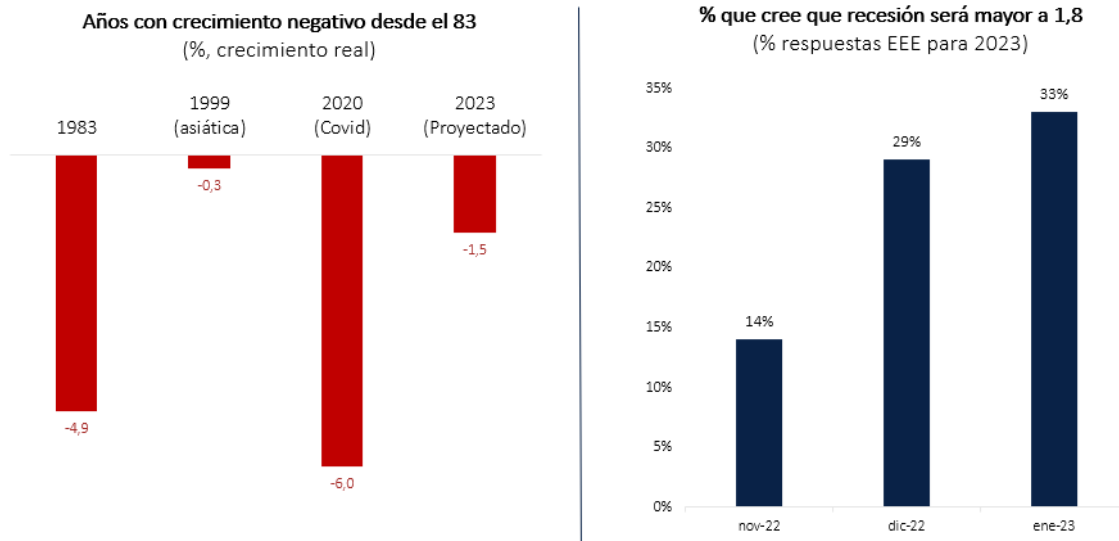
@LeoSotoChile

.

¿De Santiago a Valparaíso en una hora y media?

Si hoy en bus y en auto el trayecto se recorre en menos tiempo.

¿?



Fuente: En base al Banco Central y Encuesta de Expectativas Económicas.

EXPECTATIVAS AL INICIO DEL 2023

- a) Proyecciones del Banco Central es que economía en 2023 caerá en -1,5% del PIB.

Pero las Expectativas de agentes económicos para 2023 es que economía caerá más que el -1,5% proyectado por el Central (33% de los encuestados del Central señalan que recesión para 2023 será mayor a lo proyectado por BC).

En los agentes económicos puede estar influyendo el clima político de caída de liderazgo del Gobierno en estos 10 meses de gestión y que el primer semestre será complejo con menor crecimiento y números rojos en IMACEC, probablemente menos empleos o estancada su capacidad de creación, con consumo frenado como mostró diciembre.

Otro factor que puede estar influyendo es la situación internacional donde en Europa sigue el fantasma de "la guerra a 2 horas" y sigue pegando la inflación en los alimentos que en diciembre volvió a pegar fuerte

b) Mercado sigue creyendo apuesta de inflación más moderada a fin de año.



Fuente: En base al Banco Central.

Aquí puede estar influyendo la política.

Porque ya se fue a ley el Acuerdo Constitucional y seguirá institucionalizado el proceso constitucional más corto, acotado y con bordes claros, por lo tanto, la incerteza institucional jurídica disminuirá (aunque lo del Fiscal Nacional no ayuda en eso) y además, el gobierno logró rechazar moción sobre "Auto préstamos" en la Comisión de Constitución de la Cámara porque gatillaría el fantasma de los nuevos retiros (es de esperar que en la Sala de la Cámara se rechace también y así se borra esta amenaza de rebrote inflacionario)

C) La caída de aprobación del Presidente Boric a 25%

El problema actual es que el tema Indulto gatilló imagen (real por cierto) de que en la Moneda están instalados unos desprolijos y amateurs ahondando la desconfianza en la gestión gubernamental.

Se requiere entonces enfrentar esta desconfianza con un potente Plan de Reactivación Económica, acelerando planes gubernamentales en seguridad y en recuperación educativa por ejemplo.

Pero también se requiere nuevo Gabinete que enfrente esta desatada desconfianza ciudadana en el gobierno.



**TIPS SOBRE RENOVACIÓN DEL SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO
REMUNERADO
(BOLETÍN 15.140)**

Senadora XIMENA ORDENES NEIRA

Votación en general proyecto de ley que renueva subsidio al transporte público remunerado y establece nuevo marco de financiamiento.

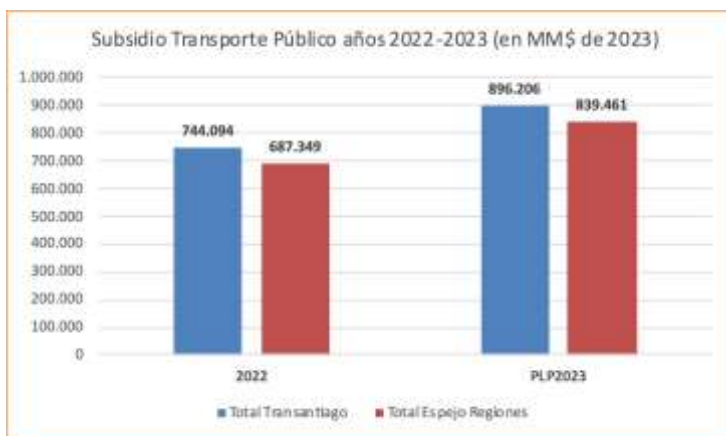
Este proyecto de ley es relevante para el 70% de las familias chilenas que son usuarios permanentes del transporte público y que - especialmente en regiones- requieren una señal política de que se va a iniciar en los próximos meses un real proceso de modernización del transporte público regional y así salir del atraso que viven hoy miles de familias usuarias del transporte público en regiones.

Chile no resiste más tener ciudadanos de primera clase que tienen transporte público con tarjeta BIP, con buses eléctricos, en que combinan Metro con transporte de superficie que reciben para este año 2023 casi \$890.000 millones para solo subsidiar el funcionamiento del Transantiago.

Lo que ocurre en la RM es el resultado de un subsidio focalizado en arreglar y mejorar el transporte público.

Mientras que las Regiones del país reciben un monto anualmente casi similar de \$840.000 millones este 2023, que durante estos 15 años NO ha ido a modernizar el Transporte Público regional, lo que explica los atrasos y la baja calidad del transporte público que vivimos en regiones.

Cuando uno revisa los ejercicios presupuestarios de años anteriores de la ley 20.378 constata que los recursos del espejo iban más a obras regionales de desarrollo que al transporte público regionales.



Estos fondos del Espejo para regiones del Transantiago lamentablemente NO se han destinado al transporte público y se han dedicado a financiar “obras de desarrollo regional” con cargo al Espejo que está en el FAR (Fondo de Apoyo Regional).

Esta es la principal anomalía que requiere enmendarse en el nuevo marco legal que regulará el Subsidio al Transporte Público.

Así como el proyecto de Royalty Minero que está viendo el Senado crea un Fondo Regional para la Competitividad y la Innovación productiva, creemos que la renovación de un subsidio permanente para el transporte público debe en regiones avanzar hacia que financie principalmente proyectos regionales y locales que mejoren el transporte público en regiones.

No solo hay un desafío de ejecución de la inversión regional, sino también ejecutar en áreas relevantes para la población como es el Transporte Público regional.

Algunos postulamos que debiera destinarse casi la totalidad del subsidio al transporte público en regiones y no nos gusta lo aprobado en la Cámara de Diputados que solo establece un piso del 20% para el transporte público regional.

Está fórmula nos parece insuficiente. En la Comisión del Transporte del Senado y -espero que en esta Sala del Senado- somos partidarios de que esta herramienta del Subsidio Nacional del Transporte Público en regiones a partir del nuevo marco legal que debemos aprobar este año se destine en su totalidad a modernizar y mejorar la calidad del transporte público en regiones.

El Transporte Público es una herramienta básica de equidad social y además, ayuda a la calidad de vida de las ciudades si es que se acelera su transición energética a la electromovilidad.

Por tanto, no puede renovarse su subsidio por 2 años como proponía este Proyecto del Ejecutivo, ni tampoco puede ser un subsidio por 10 años como propuso la ley 20.378 que estamos modificando con este proyecto de ley.

Se requiere un subsidio permanente al transporte público que esté ligado a los diversos planes de transporte que se desarrollen en las regiones y sea en esos planes donde se de un rol al Transporte Público mayor y como coexiste con el transporte público menor, como se implementa en regiones australes donde deben integrarse distintas

modalidades de conectividad en función de lo que definan los planes regionales de transporte, como se integran las modalidades de transporte rural y urbanas en otras regiones .

Esa capacidad institucional para elaborar Planes Regionales de Transporte debe ser parte de este proyecto en una primera etapa para que financie profesionales que elaboren esos planes de transporte regionales y para tener Autoridades Regionales de Transporte que formen parte de los nuevos sistemas.

En la ley de presupuesto 2023 renovamos el subsidio para este año, pero también firmamos un Protocolo anexo donde la tramitación de este proyecto de ley fue parte sustantiva del debate presupuestario.

Ahí concordamos avanzar este 2023 tanto por la vía reforma legal como administrativa en dar señales de que al Senado y al Ejecutivo le importa avanzar ahora -y no en 2025- con modernizar el transporte público regional.

Este proyecto debemos sacarlo adelante este 2023 y esperamos que esta Sala respalde que los recursos del Espejo financien en las regiones mejores sistemas de transporte público.

Esas señales de que importa esa modernización debemos darla permanentemente y como Comisión de Transporte queremos reiterarlo porque estamos convencidas de la relevancia de que mejorar el transporte público mejora la calidad de vida de las familias chilenas vulnerables y de clases medias que son las principales usuarias del transporte público.

Si queremos avanzar en dar señales concretas de que nuestro foco es mejorar la calidad de vida de las familias se requiere modernizar el Transporte Público especialmente en regiones y este es el proyecto de ley para concretar estos avances.

Es importante legislar sobre este subsidio al transporte público tanto para la RM como para Regiones y por eso votamos en general a favor la idea de legislar para que empecemos a mostrar que es clave para mejorar la vida de las personas.

Apruebo la idea de legislar y,

como presidenta Comisión de Transporte estamos proponiendo que se fije fecha de plazo para presentar indicaciones en particular hasta el viernes 17 de marzo en la Secretaría de la Comisión de Transporte del Senado

SOBRE AYUDAS SOCIALES 2023 : BONO MARZO, BOLSILLO FAMILIAR ELECTRÓNICO Y AUMENTO SUF Y AF

Ya sabemos que 2023 se instala, en especial un primer semestre recesivo, en que se mantiene la inflación, especialmente de alimentos, no hay incremento de los empleos y probablemente aumentará el desempleo y los salarios seguirán perdiendo poder adquisitivo.

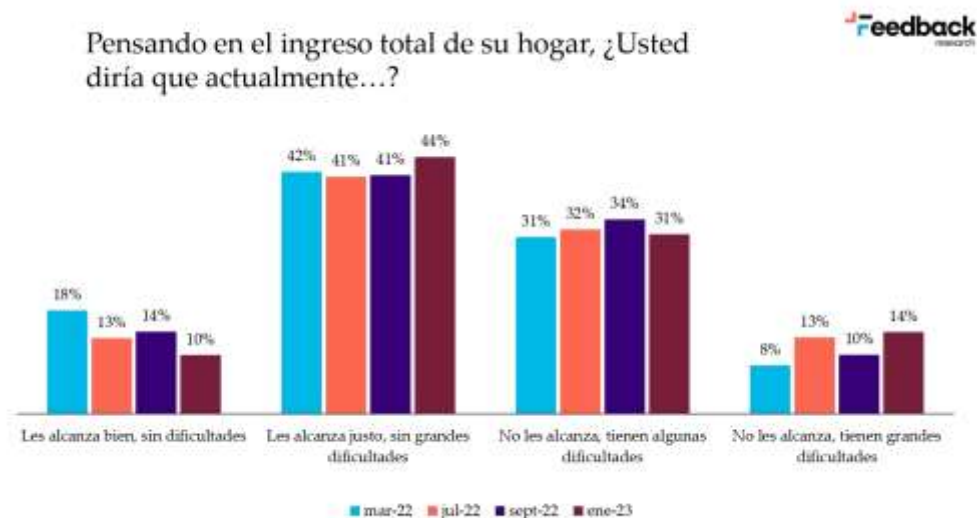
Las ayudas sociales son insuficientes ya que utilizan como vía de acceso tener Asignación familiar y SUF con lo cual llegan a solo a 1,5 millones de hogares que representan solo 25% de los hogares chilenos según datos del Registro Social de Hogares.

Los 3 instrumentos de apoyo del gobierno (boletín 15,665) llegan a los perceptores SUF y AF y ellos son 3,1 millones de perceptores y 1,5 millones de hogares, pero en el Registro Social de Hogares hay en el 40% más vulnerables hay más de 3,5 millones de hogares o sea esta ayuda del gobierno no llega ni a la mitad del 40% más vulnerable.

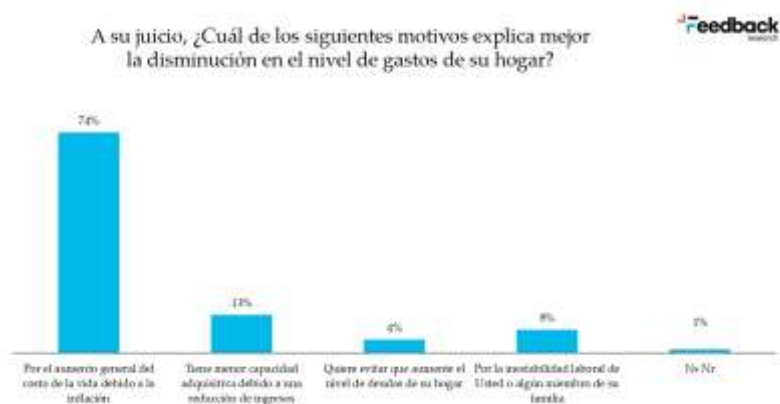
La Asignación Familiar ha disminuido la última década (lamentablemente en las estadísticas de la SUSESO solo hay datos hasta 2017 del bono marzo) y debieran pedirse datos ACTUALIZADOS SOBRE PAGO BONO MARZO, PERCEPTORES DE ASIGNACIÓN FAMILIAR Y SUF AL AÑO 2022 para dimensionar coberturas de esta ayuda del gobierno.

En esta situación uno de los temas que más ha impactado en las familias chilenas es el alto nivel inflacionario 2022 y que disminuirá a fines del 2023 según proyecciones del BC, pero que se está lejos de llegar a la meta inflacionaria del Banco Central.

Diversos estudios revelan que app 50% de las familias reconocen tener dificultades para “llegar a fin de mes” y esto se mantiene en enero 2023.

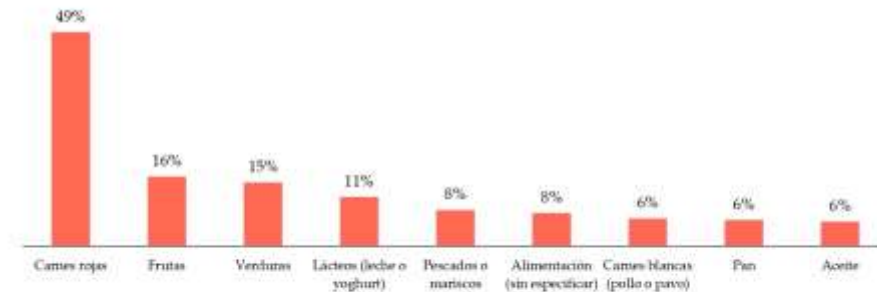


Es la alta inflación la que explica estas dificultades que están viviendo las familias chilenas



Es la Inflación , especialmente de los alimentos lo que explica estas estrecheces que están viviendo las familias y la ayuda social del gobierno es crear Bolsillo Familiar Electrónico q sería un aporte de \$13.500 por cada carga AF y SUF q beneficiaría a 1,5 millones de hogares

Por favor, indique qué es lo más importante que se ha dejado de consumir en su hogar durante el último año:
(menciones múltiples - principales recodificadas)



El problema político es que app 50% de los hogares reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes, que han dejado de consumir productos alimenticios como carnes rojas , frutas y verduras y la ayuda q da el gobierno llega a 1,5 millones de hogares o sea casi 20% de los hogares lo cual es claramente INSUFICIENTE

Según IF el aporte a las familias de los \$13.500 mensuales por cada carga AF y SUF son US\$ 422,0 millones por 2023, o sea casi la misma cantidad q significa el beneficio tributario a los camioneros por devolverles uso del petróleo diesel.

Creo que gobierno puede hacer esfuerzo adicional para mejorar monto y cobertura de ese programa de apoyo extraordinario.

Si no aumenta ayudas puede crecer presión social y política por 6° retiro, lo cual sería peor porque desataría otra ola inflacionaria que sabemos perjudica a los más pobres.

TIPS SOBRE LA SITUACIÓN TARIFARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

A) En abril 2022 se anunció un proceso de congelamiento tarifario del transporte público regulado.

Esto benefició al 52% de los usuarios, pero 48% son usuarios del transporte público no regulado que durante el año pasado vieron subir las tarifas del transporte público en regiones como Atacama y Coquimbo y en zonas rurales.

Hoy hay tarifas congeladas y otras descongeladas en zonas no reguladas -que pagan app \$100 más-.

b) MTT a fines del año pasado anunció intención de descongelar las tarifas.

El panel de expertos del Transantiago hace algunas semanas sugirió subir en \$40 la tarifa en la RM y la autoridad ministerial ha señalado que seguirá “congelado por ahora”, pero no ha dado señales si esto será por todo el año 2023.

c) La situación inflacionaria alcanzó en 2022 un 12,8% y en el caso de Transportes la inflación 2022 llegó a 18,3%.

El transporte público es usado como medio de conectividad para el 70% de la población, principalmente de clases medias y sectores vulnerables.

Las proyecciones del BC y de analistas señalan que la inflación seguirá alta para 2023 que llegaría este año en un rango entre 6% a 8% en 12 meses.

Por tanto, es clave que MTT formalice que el congelamiento tarifario se mantenga por todo el año 2023 y salir de la ambigüedad del “por ahora”.

Además, generar una estrategia hacia las zonas no reguladas de tal manera que ese congelamiento se extienda para el transporte rural y

en las ciudades en que no operó el congelamiento tarifario de abril 2022.

El congelamiento puede financiarse en la RM con políticas anti evasión y mejor gestión de flota sin involucrar mayores subsidios según diversos expertos.